



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

CONSEJO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA HUMANA

Setor Comercial Sul – B, quadra 09, lote C – Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, 10º andar.

CEP: 70.308-200 – Brasília/DF

(61) 2025 3918 / 3581 - E-mail: cddph@sdh.gov.br

RELATORIO FINAL

*Grupo de Trabajo “Derechos Humanos de los
Profesionales de Comunicación en Brasil”
creado por la Resolución n° 07/2012*

SUMARIO

I Introducción

II. Marcos Normativos de Protección del Derecho Humano a Libertad de Expresión

2.1 Normativas Internacionales

2.2 Normativas Nacionales

III. Constitución del Grupo de Trabajo “Derechos Humanos de los Profesionales de Comunicación en Brasil”

IV. Agenda de Trabajo del GT

V. Contexto de la violencia contra comunicadores en Brasil

VI. Recomendaciones para garantía del Derecho Humano a la Libertad de Expresión

4.1 Al Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus competencias

4.2 Al Poder Legislativo, en el ámbito de sus competencias

4.3 Al Poder Judicial y a los organismos ligados a las funciones esenciales de Justicia, en el ámbito de sus competencias

4.4 Al Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), en el ámbito de sus competencias

VII. Observatorio de la Violencia contra Comunicadores

Archivos Adjuntos:

- Resolución nº 06 do CDDPH, que dispone sobre recomendaciones para garantía de derechos humanos y aplicación del principio da no violencia en el contexto de manifestaciones y eventos públicos, así como en la ejecución de mandados judiciales de manutención y reintegración de pose;
- Nota sobre violencia contra comunicadores en el Valle del Acero, 17 de abril de 2013;
- Nota de Repudio a la violencia en contra profesionales de comunicación durante las manifestaciones en São Paulo, 14 de junio de 2013;
- Nota sobre amenazas al dibujante Carlos Latuff, 04 de septiembre de 2013;
- Nota sobre a muerte de Santiago Ilídio;

Integrantes del Grupo de Trabajo Derechos Humanos de los Profesionales de Comunicación en Brasil por institución:

- Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH): *Tarciso Dal Maso Jardim (conselheiro)*;
- Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (SDH-PR): *Bruno Gomes Monteiro (titular)* y *Marcelo Murteira de Salles (suplente)*;
- Secretaría General de la Presidencia de la República (SG/PR): *Joana Zylbersztajn (titular)* *Sergio Alli*;
- Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SECOM/PR)¹: *Márcia Brandão Raposo Fernando (titular)*, y *Ivanir José Bortot (suplente)*; *Thompson Viegas Filho (titular)*, y *Sandra Sato (suplente)*.
- Ministerio de la Justicia (MJ)²: *Delano Cerqueira, Júlio César Fernandes dos Santos, Paula Dora Aostri Morales, Heloisa Gimenez (titular)* y *Alexandre Ramagem Rodrigues* y *Clarice Calixto (suplente)*;
- Ministerio de las Comunicaciones: *James Marlon Azevedo Gorgen (titular)* y *Octavio Penna Pieranti (suplente)*;
- Procuradoria Federal de los Derechos del Ciudadano, del Ministerio Público Federal (PFDC/MPF): *Ailton Benedito de Souza (titular)* y *Luciana Marcelino Martins (suplente)*;
- Asociación Brasileña de Imprensa (ABI): *Tarcísio Holanda (titular)* y *Mário Augusto Jakobskind (suplente)*;
- Federación Nacional de los Periodistas (FENAJ): *Maria José Braga (titular)* y *José Carlos de Oliveira Torves (suplente)*;
- Asociación Nacional de los Periódicos (ANJ): *Ricardo Pedreira (titular)* y *Carlos Alves Müller (suplente)*;
- Asociación Brasileña de Empresas y Empreendedores de la Comunicación (Altercom): *Renato Rovai Júnior (titular)* y *Marco Antonio Piva (suplente)*;
- Associação Brasileira de Periodismo Investigativo (Abraji): *Guilherme Alpendre (titular)* y *Marina Iemini Atoji (suplente)*;
- Artigo 19: *Laura Tresca (titular)* y *Julia Lima* y *Paula Martins (suplentes)*;
- Asociación Brasileira de Emisoras de Radio e Televisión (ABERT): *Daniel Pimentel Slaviero (titular)*;
- Movimento Nacional de Radios Comunitarias (MNRC): *João Carlos Santin*

¹ No dia 10 de março de 2014, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM/PR) solicitou a substituição dos membros Márcia Brandão Raposo e Ivanir José Bortot por Thompson Viegas Filho e Sandra Sato;

² O Sr. Delano Cerqueira foi substituído por Júlio César Fernandes dos Santos, que foi substituído por Paula Dora Aostri Morales, que foi substituído por Heloisa Gimenez. O Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues foi substituído na suplência por Clarice Calixto.

(titular) y Angelo Ignácio (suplente);

- Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO): *José Luiz do Nascimento Sóter (titular);*

- Federação Interestatal dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão (FITERT): *José Antônio Jesus da Silva (titular) y Antônio Fernando Cabral (suplente).*

Coordinación y relatoría del Grupo de Trabajo Derechos Humanos de los Profesionales de Comunicación en Brasil:

- Coordinador: *Tarciso Dal Maso Jardim (CDDPH)*

- Relatora: *Laura Tresca (Artigo 19)*

I. Introducción

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

En los últimos años, las organizaciones internacionales y las ONG comenzaron a dar mayor visibilidad a la violencia contra los profesionales de los medios de comunicación, con el fin de revelar a la sociedad y llamar la atención de los poderes públicos en el mundo. Las diversas formas de restricción violento del derecho a la libertad de expresión como homicidios, secuestros, acoso, intimidación y detenciones arbitrarias se han convertido cada vez más frecuentes en los diversos contextos, así como la negación del acceso a la información, y a la impunidad de los crímenes cometidos.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)³, la Campaña Emblema para la Prensa (PEC, por sus siglas en Inglés)⁴, la Federación Internacional de Periodistas (FIJ), a Reporteros sin Fronteras (RSF), el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión Exchange (IFEX), la Asociación Interamericana de Prensa (IAPA), la Organización de las Naciones Unidas⁵, entre otros, señalan datos alarmantes relación a las violaciones de los derechos humanos en el ejercicio de sus profesiones. Aunque existe un cierto grado de disparidad entre los datos, hay en común el alto número de homicidios y los crecientes intentos de utilizar la violencia como una forma de restringir la libertad de expresión.

En mensaje conjunto en razón del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en mayo de 2013, el Secretario-General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, y la Directora-General de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la

³ Segundo o CPJ, em 2013, 70 jornalistas foram assassinados no exercício da profissão, sendo três no Brasil.

⁴ Segundo a PEC, em 2013, 129 foram assassinados, sendo seis no Brasil.

⁵ Segundo o “Plano de Ação da ONU para a Segurança dos Jornalistas e a Questão da Impunidade”, de 2008 a 2012 22 jornalistas foram mortos no Brasil.

ciencia y la cultura (UNESCO), Irina Bokova, alertaron que más de 600 periodistas han sido muertos en los últimos diez años. Entre ellos, muchos han perdido la vida realizando la cobertura periodística en zonas no conflictivas. Esta información alarmante indica la necesidad de una cuidadosa investigación sobre los contextos en que se producen estas violaciones y las diferentes necesidades de los comunicadores en función de sus realidades sociales.

Según el Instituto Internacional de Prensa (IPI), en el 2013, 120 periodistas fueron asesinados en todo el mundo. De estas muertes, 39 se registraron en el Medio Oriente y 37 en África. En América Latina, el país con el mayor número de asesinatos de periodistas, que en 2012 fue México, se convirtió en el Brasil, con seis muertes (esta cifra está subestimada).

Al analizar la situación en Brasil, lo hacemos dentro de un contexto de inseguridad de comunicadores en todo el mundo. En el caso brasileño, los datos son especialmente preocupantes los datos del Relatorio Índice de Impunidad del CPJ que analiza los asesinatos de periodistas de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2012, que siguen sin resolverse. Los países que presentan más de cinco casos no resueltos aparecen en la lista, y Brasil se encuentra entre los que ocupan la 10^a posición en el ranking con nueve asesinatos sin resolver a lo largo del periodo analizado.

Estos datos apuntan a la centralidad de la discusión sobre las maneras de superación de la impunidad, medidas de protección a los comunicadores y prevención a la violencia, que deben ser enfrentadas en un esfuerzo armónico entre sociedad y Estado. El miedo creado por el crimen tiene el potencial de restringir su actuación y de sus semejantes, generar la autocensura e impedir que toda la sociedad tenga acceso a la información. La democracia no puede ser integral sin libertad de expresión, y no habrá total libertad de expresión si los comunicadores no se sienten seguros para ejercer sus actividades.

II. Marcos Normativos de Protección del Derecho Humano a la Libertad de Expresión

El derecho a la libertad de expresión garantiza a las personas la oportunidad de expresar, buscar y recibir información de todo tipo, siempre que cuidada la privacidad

de otra persona, independientemente de la intervención de terceros. Esto puede ocurrir oralmente, por escrito o por cualquier medio de comunicación.

Considerado como el centro para la consolidación de los regímenes democráticos y la ejecución de otros derechos humanos y libertades fundamentales, el derecho a la libertad de expresión está garantizada por los tratados internacionales y está reconocido por muchos países en sus legislaciones internas, como es el caso de Brasil.

2.1 Normas Internacionales

En cuanto a las normas internacionales de protección de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión adoptado en la Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 19 establece que:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

El **Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos** establece la protección al derecho a la libertad de expresión en su artículo 19:

- 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.*
- 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:*
 - a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;*
 - b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”.*

La **Convención Americana sobre Derechos Humanos**, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, expresa sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en su artículo 13:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

- a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o*
- b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.*

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”.

La Convención también establece en su artículo 14 el derecho de rectificación y respuesta, esencial para garantizar que la libertad de expresión no sea utilizada como una forma de difamación y lesionar la reputación de otra persona:

“1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se

dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.”

Importante destacar la **Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2012 sobre la Seguridad de los Periodistas**, que al reconocer la importancia de la libertad de expresión y de la prensa libre en construcción de la democracia, apuntan el frecuente riesgo de la intimidación, el acoso y la violencia a la que están sometidos los periodistas y el combate a la impunidad como uno de los más importantes desafíos para el fortalecimiento de la protección de los periodistas.

En cuanto a la responsabilidad de los Estados, indica la necesidad de que hagan todo lo posible para evitar la violencia contra los periodistas y profesionales de los medios de comunicación y promover un ambiente seguro y eficaz para que los periodistas puedan ejercer sus funciones con independencia y sin injerencias indebidas. Como medidas específicas, cita: (a) los cambios legislativos; (B) las campañas de concienciación en los tribunales y entre los policías y militares, así como entre los periodistas y la sociedad civil con respecto a las obligaciones de derechos humanos internacionales y el derecho humanitario en relación con la seguridad de los periodistas; (C) el seguimiento y la notificación de los ataques contra los periodistas; (D) la condena pública de este tipo de ataques; y (e) la presentación de los recursos necesarios para la investigación y juzgamiento de estos ataques.

2.2 Normas Nacionales

En la **Constituição Federal**, la libertad de expresión está garantizada en su artículo 5º, del Capítulo I ("De los Derechos y Deveres Individuales y Colectivos"). Los puntos más relevantes sobre este derecho están comprendidos en los incisos abajo:

“IV – es libre a manifestación de pensamiento, siendo limitado el anonimato;

IX- es libre la expresión de actividad intelectual, artística, científica y de comunicación, independiente de censura o permiso;

X – son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas, garantizado el derecho a la indemnización por daños y perjuicios patrimoniales o morales resultantes de la violación;

XLI – la ley castigará cualquier discriminación de los derechos y libertades fundamentales ”.

El **Programa Nacional de Derechos Humanos - PNDH-3**, en su Eje Orientador V: Educación y Cultura en Derechos Humanos, directriz 22 establece la garantía del derecho a la comunicación democrática y el acceso a la información para consolidar una cultura de los Derechos Humanos, y tiene dos objetivos estratégicos:

“Objetivo Estratégico I: Promover el respeto a los derechos humanos en los medios de comunicación y la aplicación del papel en la promoción de una Cultura de los Derechos Humanos .

Objetivo Estratégico II: Garantía al derecho a la comunicación democrática y al acceso a la información”.

III. Constitución del Grupo de Trabajo “Derechos Humanos de los Profesionales de Comunicación en Brasil”

La especificidad de la violación de los derechos de los periodistas en el ejercicio de su profesión fue traído a la atención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República por los representantes de las asociaciones y sindicatos de periodistas que se reunieron con la ministra de Maria do Rosario, en mayo de 2012 . Se celebró una reunión poco después del asesinato de Decio de Sá, blogger y periodista de "Estado de Maranhão", muerto en el 23 de abril.

El objetivo principal fue discutir las acciones que pudieran combatir el crecimiento de este tipo de violencia, después de haber sido acordado con el grupo que un mecanismo de vigilancia se crearía para seguir las investigaciones de delitos cometidos contra periodistas.

En la ocasión, el presidente de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), Maurício Azêdo, hizo hincapié cuanto a la falta de responsabilidad penal de los autores de las diversas formas de ataques violentos contra la libertad de expresión lo que ha contribuido para el aumento de la violencia. El presidente de la Asociación Brasileña de Empresas y Emprendedores de la Comunicación (Altercom), Renato Rovai, comentó sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores activos en los blogs, que son más vulnerables por no disfrutar de la estructura legal de una empresa de comunicación.

También han participado de la audiencia el director-ejecutivo da ANJ (Associação Nacional de Periódicos), Ricardo Pedreira; y el vicepresidente de la Fenaj (Federação Nacional de los Periodistas), Celso Schroeder.

Reconociendo la complejidad de la cuestión a nivel internacional y la evaluación de la existencia de graves violaciones de los derechos humanos de los comunicadores, el asunto fue llevado a la agenda del Consejo para la Defensa de la Persona Humana (CDDPH) en su 212^a reunión anual en agosto, pero ante la imposibilidad del representante de la ABI en el Consejo, en esta ocasión, así como la urgencia de la cuestión, las estrategias de acción del CDDPH se discutieron entre la dicha reunión y la 213^a, realizada en octubre. En esta última reunión la Ministra y Presidenta del Consejo, Maria do Rosário, dio la ciencia a los presentes de la publicación de la Resolución N^o 07, de 18 de octubre de 2012, que constituyó el **Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de los Profesionales de Comunicación**. Sus objetivos consistían en:

"i) examinar las quejas relativas a la violencia contra los profesionales de los medios de comunicación en el ejercicio de esta función, enviar a los organismos competentes y supervisar su desarrollo;

ii) proponer acciones que ayuden a establecer un sistema para el seguimiento de las denuncias relativas a violaciones de los derechos humanos de estas personas, así como las medidas destinadas a mejorar las políticas públicas para este segmento; y

iii) proponer directrices eficaces para promover la seguridad de los profesionales de comunicación en situaciones de riesgo derivadas de su práctica profesional".

Hacemos hincapié en que la creación del GT representaba en ese momento más que un compromiso de trabajo, fue también un reconocimiento del problema por parte

del gobierno brasileño, que consideró anteriormente que la gran mayoría de las muertes registradas en Brasil comunicadores no guardaba relación directa con la profesión.

El grupo de trabajo está coordinado por el Asesor de la CDDPH y en el principio tenía la siguiente composición: representantes - titular y sustituto - la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia (SDH-PR); de la Secretaría General de la Presidencia (SG/PR); de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SECOM/PR); del Ministerio de Justicia (MJ); del Ministerio de Comunicaciones; de la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano del Ministerio Público Federal (PFDC / MPF); de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI); de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ); de la Asociación Brasileña de Empresas y Emprendedores de la Comunicación (ALTERCOM); de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI); y de la Federación Interestatal de Trabajadores de Radiodifusión y Televisión (FITERT).

De acuerdo con artículo 3 de la Resolución de número 7 de la CDDPH , de 2012, se acordó que el Grupo de Trabajo debe desempeñar sus funciones por 180 (ciento ochenta) días, prorrogables por igual período. Teniendo en cuenta la instalación de GT en febrero de 2013, cuando se dio la renovación de su resolución, se estableció en la reunión anual en octubre de 2013 que las organizaciones que solicitaron la inclusión, o que acompañaron a sus trabajos desde el principio como invitados, se incorporarían a partir de entonces en la composición del GT. Según este procedimiento, se han unido al GT las siguientes organizaciones: el Artículo 19, la Asociación Brasileña de Radio y Televisión (ABERT), Movimiento Nacional de Radios Comunitarias (MNRC) y la Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria (ABRAÇO).

Este informe presenta un análisis sobre el fenómeno de la violencia contra los periodistas, inferidas en las actividades del GT y sugiere propuestas de acciones y directrices para que se logre una seguridad eficaz de los profesionales de la comunicación en situaciones de riesgo derivadas de sus actividades. Anexo, las notas que fueron escritas por el GT a lo largo de sus trabajos.

IV. Agenda de Trabajo del GT

Para cumplir con los propósitos establecidos en la Resolución N ° 07, se ha definido como método de trabajo, inicialmente hacer un estudio sobre los datos a cerca de las violencias que han ocurrido en los últimos años contra los comunicadores, y de con estos datos, mediante la realización de reuniones periódicas y de audiencias públicas en algunas ciudades con mayor incidencia de violaciones, conocer la realidad y llevar a cabo la consulta directa a los comunicadores que han sufrido algún tipo de violencia. Con las audiencias, fue posible a los miembros del Grupo de Trabajo obtener informaciones, conocer algunas situaciones que violan o amenazan el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, identificar los obstáculos y las dificultades para el libre ejercicio de sus actividades, así como recibir propuestas de iniciativas para encontrar soluciones que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la integridad personal de los comunicadores.

Tabla de Actividades del Grupo de Trabajo	
Tipo	Fecha de Realización
Reunión de instalación del grupo de trabajo (GT)	19 de Febrero de 2013
Audiencia Pública de Ipatinga (MG)	19 de Marzo de 2013
Reunión Ordinaria del GT	10 de Abril de 2013
Reunión Ordinaria del GT	25 de Mayo de 2013
Audiencia Pública de São Paulo	25 de Junio de 2013
Reunión Ordinaria del GT	06 de Agosto de 2013
Reunión Ordinaria del GT	07 de Octubre de 2013
Coloquio sobre medidas nacionales e internacionales para la protección de los profesionales de la comunicación - Río de Janeiro	15 de Outubro de 2013
Audiencia Pública en Campo Grande (MS)	08 de Noviembre de 2013

AAktividad autogestionada en el Foro Mundial de Derechos Humanos: Internet y el Derecho a la Privacidad y Libertad de Expresión	12 de Diciembre de 2013
Reunión Ordinaria del GT	28 de Enero de 2014
Reunión Ordinaria del GT	11 de Marzo de 2014

4.1 Informes de las Actividades del GT

En esta sección se presenta una breve reseña de los principales puntos de la agenda discutida durante las siete reuniones del grupo de trabajo, los temas tratados en tres audiencias públicas, así como en dos eventos temáticos celebrados.

Reunión de la Instalación del GT, Febrero de 2013

a) Declaraciones de los periodistas en situación de riesgo

Para la reunión de la instalación de GT, se les pidió a los periodistas **Mauri König** e **André Caramante** que dieran sus testimonios, ambos amenazados de muerte. Se hizo claro en sus discursos que la motivación de las amenazas de muerte se habían originado a causa de su trabajo como profesionales de periodismo.

En el caso de König, las amenazas empezaron tras la producción de la serie de informes "Policía Sin Ley". Publicado en el diario Gazeta do Povo, Paraná, que expuso las irregularidades en la operación de la Policía Civil del Estado. Después de la publicación de los informes, König comenzó a recibir llamadas telefónicas en la oficina del periódico, con informaciones consistentes de que había un plan de parte de la policía con vistas a que su casa fuera ametrallada. Ante la amenaza, se exilió en Perú durante casi dos meses, con el apoyo de la Gazeta do Povo, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Hoy ya está nuevamente en Brasil, pero tiene la intención de seguir lejos de reportajes acerca de la policía por un período indefinido.

André Caramante, periodista de la Folha de S. Paulo especializado en la cobertura de seguridad pública, afirmó haber sido obligado a trasladarse del país y ocultarse tras la intensificación de amenazas dirigidas a él y a su familia. El periodista,

quien hace seis años había contado protección privada ofrecida por el periódico debido a su trabajo, vio la situación empeorar tras la publicación del informe titulado: "El ex jefe de la Ruta se hace político y promueve la violencia en Facebook", que informaba las acciones de campaña de elección de Paulo Telhada, coronel retirado de la Policía Militar y actual concejal de São Paulo.

Como König, Caramante regresó al país, pero dejó de operar en su área. Después de pasar un tiempo en el editorial de deportes de Folha de S. Paulo, fue despedido a principios de este año después de regresar de vacaciones por motivos de reducción de costes. En 2012, cuando surgieron noticias de las amenazas al periodista, la SDH se reunió con la dirección del vehículo en el que trabajaba y puso los programas de protección federales a su disposición. En ocasiones, incluso antes de la formación del GT, la dirección del periódico, dijo que sería responsable de la seguridad de su reportero. Caramante informó recientemente de que el periódico no le ofrecía ninguna medida más de protección hace ya algunos meses.

b) Primeiros dados

En esta ocasión, fue presentado por el Defensor del Pueblo Nacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de un estudio inicial de las denuncias de violaciones a los periodistas entre enero de 2012 y febrero de 2013. La representante del Defensor del Pueblo, Irina Bacci, informó haber recibido a través de este canal un total de 12 quejas durante este período, de los cuales siete recibidos eran casos de homicidios. Al GT le llamó la atención sobre el hecho de que estas quejas hayan sido provenientes de cuatro regiones diferentes del país, lo que indica que no es un fenómeno aislado.

El representante de FITERT presentó el informe de la entidad relación a la violencia contra los radiodifusores.

Audiencia Pública de Ipatinga, Marzo de 2013

La audiencia pública en Ipatinga se produjo poco después del asesinato del periodista Rodrigo Neto. El periodista fue ejecutado con disparos por dos hombres que estaban en una motocicleta cuando salía de un bar que solía frecuentar. La ministra María do Rosario asistió al evento junto con un comité de CDDPH compuesta, entre

otros, por el Presidente del GT de Comunicadores, Tarciso Dal Maso, y por el representante titular de la SDH en el GT, Bruno Monteiro.

Después de la celebración de una audiencia pública convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Minas Gerais, los miembros de la CDDPH se reunieron con el equipo de Homicidios y Protección a las Personas (DHPP) de Belo Horizonte y luego con representantes del Comité Rodrigo Neto, formado por periodistas de la región que exigía la investigación del crimen y el castigo de los responsables. Ellos transmitieron las informaciones sobre el contexto de amenazas y violaciones de los derechos de los comunicadores en la región del Valle del Acero, causados por la acción de grupos de exterminio que participan en las estructuras de seguridad pública locales

El movimiento creado para investigar el crimen reveló la existencia de un escuadrón de la muerte que actuaba con impunidad en el Valle del Acero, y estaba compuesto de civiles, policías militares, además de milicias. Meses más tarde, dos agentes de policía fueron detenidos, acusados de ser los ejecutores del asesinato de Rodrigo Neto y están en espera de juicio. Sin embargo, la autoría intelectual del crimen no fue aclarada todavía.

Reunión Ordinaria del GT, Abril de 2013

- a) Propuesta de la federalización de la investigación de los crímenes contra periodistas

Continuando con el debate iniciado en la primera reunión sobre la lucha contra la impunidad, el GT recibió al congresista, diputado federal delegado Protógenes (PCdoB-SP), que presentó su proyecto de ley No. 1078/2011. La propuesta tiene por objeto modificar la Ley N ° 10.446/2002 para establecer la participación de la Policía Federal en la investigación de delitos contra las actividades de los periodistas cuando haya omisión, inadecuación o la ineficiencia de las esferas pertinentes. En el entonces, el proyecto de ley fue aprobado por la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), pero no hubo consenso entre los miembros del Grupo de Trabajo, que optaron por seguir discutiendo esta alternativa antes de presentar una posición colectiva.

b) Plano de Acción de la ONU

Se presentó el "Plan de Acción de la ONU para la Seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad". Preparado conjuntamente por los organismos, fondos y especialmente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Comunicación (UNESCO), el plan fue creado con el objetivo de contribuir a la creación de ambientes libres y seguros para periodistas y comunicadores, tanto en situaciones de conflicto o no, cuyo objetivo es el fortalecimiento de la paz mundial y de la democracia. Entre los principales puntos previstos por la aplicación de la estrategia del Plan de Acción son:

- Fomentar la inclusión de un indicador nacional sobre la seguridad de los periodistas, sobre la base de los Indicadores de Desarrollo de la Midia de la UNESCO;
- Prestar asistencia a los gobiernos para que desarrollen leyes de protección a los periodistas y mecanismos favorables a la libertad de expresión y de información;
- La sensibilización de los periodistas, propietarios de medios de comunicación y los responsables políticos sobre los instrumentos y convenios internacionales, así como varias guías prácticas existentes sobre la seguridad de los periodistas
- El conocimiento de las organizaciones de noticias, los propietarios de medios, editores y periodistas acerca de los peligros que enfrentan sus empleados, en particular los periodistas locales;
- La concienciación de los ciudadanos para que comprendan las consecuencias perjudiciales de la reducción o limitación de la libertad de expresión de un periodista;
- Convocatoria de todas las partes interesadas y, en particular, las empresas de comunicación y sus asociaciones profesionales, el establecimiento de medidas de seguridad para los periodistas, incluyendo, pero sin excluir otros, cursos de formación en materia de seguridad para los periodistas, salud y vida, acceso a la seguridad social y la remuneración adecuada tanto para los

empleados a tiempo completo como para los que no tienen vínculo de empleo fijo (free-lances);

- Capacitación para periodistas sobre la seguridad y la seguridad digital;
- El establecimiento de mecanismos de respuesta de emergencia en tiempo real;
- La despenalización de la difamación
- Mayor protección para mujeres periodistas en respuesta a la creciente incidencia del acoso sexual y violación.

En esta ocasión el GT comenzó la discusión sobre el Plan de Acción dónde se identificó la necesidad de una adaptación a la realidad brasileña, así como la importancia de que se invitaran a representantes de la UNESCO a presentar la propuesta en una próxima reunión. El representante de FITERT también mostró que en esta adaptación sería importante ampliar el concepto de periodista al Plan para los comunicadores en general. Más tarde, en diálogo con los representantes del sistema de las Naciones Unidas (ONU), la cuestión se discutió y se concluyó que, conceptualmente, estos organismos internacionales ya trabajan en la forma propuesta, y que el caso de Brasil la traducción sería tomada de acuerdo con la sugerencia de FITERT.

c) Estudio de Casos

La representante del Artículo 19, Laura Tresca, presentó el informe de la entidad para el año 2012. Según estos datos, en este período, se identificaron en Brasil 52⁶ casos de violaciones graves en los que es posible establecer la relación entre la violación y la restricción de la libertad de expresión. En este universo, 16 fueron homicidios⁷. En este entonces también fueron presentados los datos recopilados por ABRAJI.

Reunión Ordinaria del GT, Mayo de 2013

a) Avances en el estudio de casos de violaciones

⁶ Vale ressaltar que deste total 16 referiam-se a defensores de direitos humanos - dado o conceito mais amplo trabalhado pela Artigo 19 - e 36 eram comunicadores.

⁷ Sete (7) eram de comunicadores.

En esta reunión, el representante de SDH en el GT, Bruno Monteiro, presentó el estudio consolidado de casos de violaciones cometidos contra periodistas en la base de las reclamaciones recibidas por el Defensor Nacional de los Derechos Humanos y el trabajo realizado por las ONGs Artículo 19 y ABRAJI, y por la FITERT . Llegó a un universo de 72 casos en el que estuvieron involucradas a 77 personas.

Después de la reunión, se concluyó que el mayor número de casos se concentraba en los siguientes estados:

Estado	Número de casos
Pará	8
Maranhão	7
Mato Grosso	7
Mato Grosso do Sul	7
São Paulo	7
Rio Grande do Norte	5

Sobre la base de estos datos y el análisis cualitativo de las tendencias en cada estado, se decidió que sería realizada una audiencia pública se celebrará en Sao Paulo, seguida de otra en Mato Grosso do Sul y, casi al final de la obra del GT, una actividad se organizará en Río de Janeiro.

Después de un debate sobre la naturaleza de los datos disponibles, se concluyó que hay una profusión de información descentralizada sobre violaciones contra los periodistas, pero las distintas fuentes utilizan diferentes metodologías de contabilidad. De este modo, se aprobó la propuesta de crear una herramienta que centralizara las denuncias recibidas por todas las organizaciones de la sociedad civil y de los organismos gubernamentales y que estas serían transmitidas al GT. Adelante, trataremos de modo sostenido los datos de encuestas realizadas por el GT con los conclusiones particulares y antes no publicadas.

Audiencia Pública en São Paulo, Junio de 2013

a) Escucha de comunicadores en situación de riesgo

Cumpliendo la determinación del GT, se celebró una audiencia en São Paulo, con la agenda de recolección de información sobre las violaciones de los comunicadores en el estado, el cual presentó un alto número de casos en la encuesta anterior. El rumor entre los invitados se dividió en dos grupos: casos de amenazas ya identificadas por el GT y las nuevas situaciones de abuso de la fuerza policial contra los periodistas que cubrieron los acontecimientos de junio de 2013.

Casos previamente identificados por el GT

La periodista Lucia Rodrigues informó dos situaciones de riesgos a las cuales se vio sometida: durante la cobertura de la toma de posesión en la comunidad de Pinheirinho, en São Paulo, donde casi le dispararon por un miembro de la fuerza de seguridad pública presentes en el sitio, y el episodio en el que fue amenazada tras hacer un reportaje de investigación para la Radio Brasil Actual sobre el Coronel Telhada, ex comandante de ROTA (grupo de élite de la Policía Militar de São Paulo) y actual concejal de São Paulo. En el reportaje, Lúcia señaló que dos de los financiadores de la campaña de Telhada eran sus asesores directos en la Cámara. En una entrevista sobre el caso, Telhada advirtió a Lúcia que tuviera cuidado, "porque el golpe vendría de la misma manera y al mismo ritmo."

Lucía también denunció la existencia de una lista con los nombres de 200 (doscientos) periodistas que serían supervisados por la Policía Militar de São Paulo. Para la periodista, la eficiencia del modelo de funcionamiento del Programa de Protección de Testigos en Brasil está en duda para el caso de los comunicadores, ya que estos no pueden perder su identidad y por lo tanto llegar a ser penalizados en doble.

En el momento en el GT se decidió pedir información oficial acerca de dicha lista a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo. Fue enviado oficio de número 267 en el 2 de agosto de 2013, pero hasta la fecha de hoy, ninguna respuesta ha sido dada.

Lumi Zunica, camarógrafo de la TV Record, dividió el riesgo que sufrido por los periodistas en tres categorías:

1) Lo que es inherente a la profesión. Citó el ejemplo del caso en la investigación de la banda que robaba a los restaurantes en el barrio Morumbi en São Paulo y estaba en uno de los restaurantes para llevar a cabo una entrevista cuando otro asalto ocurrió;

2) Lo que supone que el periodista, ya que dentro de un cierto límite de seguridad. Citó el ejemplo de una investigación llevada a cabo en Santos (SP), cuando tuvo que usar una bolsa en la cabeza y una pistola apuntando a sí mismo, para encontrarse con una fuente;

3) El riesgo inaceptable e innecesario, una en la que el gobierno pone el comunicador en riesgos como en el caso del periodista y fotógrafo de "Ahora" que se quedó ciego después de ser golpeado por una bala de goma mientras cubría una manifestación.

El periodista también informó de que, después de cubrir "crimen Pedra da Macumba" y presentar las pruebas que contradecían la versión policial del caso que se trataba de un suicidio, comenzó a recibir llamadas de acoso para detener el trabajo de investigación. Según él, sus computadoras y correo electrónico fueron hackeadas, y su esposa y su compañero de trabajo también fueron amenazados. Su colega se trasladó de estado y se alejó de periodismo de investigación.

Los casos de violaciones en las manifestaciones de junio

Gisele Brito, reportera de la Rede Brasil, informó haber sido golpeado con porras en el cuello, las piernas, las nalgas y la cara, el 13/06/2013, durante la cobertura de una de las manifestaciones en la ciudad de São Paulo. Para ella, a pesar de que se identificó como periodista, fue atacada como ciudadana, ya que el gas lacrimógeno llegó a todos los presentes en la protesta. Gisele informó que, para hacer frente al conjunto de la policía para solicitar aclaraciones respecto a la acción fue amenazada.

En el contexto del debate sobre la propuesta de que los periodistas utilizaran equipos de señalización, Zunica corrobora con el análisis de Gisele y señaló que el uso que sería una solución provisional, ya que no sólo los comunicadores, sino la población en su todo está expuesta en manifestaciones públicas en las que la acción policial es demasiado represiva.

Fernando Mellis, reportero Portal R7, dijo que había sido asaltado por un agente de policía el 11/06/2013, en la tercera de las siete manifestaciones que cubrieron la

capital del estado de São Paulo. Según Mellis, para preguntar a un policía el motivo de la detención de uno de los manifestantes en el Dom Pedro Park, en el centro de São Paulo, el agente procedió de manera truculenta e intimidante. Mellis entonces claramente se ha identificado como profesional de prensa, y aún fue agredido con golpes de porra espalda. Cuando llevado a conocer el caso a uno de los comandantes de la policía militar presente en la protesta, recibió la respuesta irónica: "¿por qué estabas allí en el medio de la manifestación?".

Roberta Tessali, del Portal Aprendiz ha representado al colega Pedro Nogueira, quien también realizaba en el entonces la cobertura de la protesta en el 11/06/2013 en el centro de São Paulo. Nogueira y sus colegas informaron de que, al tratar de escapar del conflicto entre la policía y los manifestantes fueron acorralados por policías, quienes comenzaron a golpearlos a golpes de porra. Más tarde, ya esposado, Nogueira se identificó como periodista en trabajo y cuestionó el motivo de su detención. La justificación de la policía fue la resistencia y el desprecio; al llegar a la comisaría de policía, sin embargo, el informe de la policía registró el delito de daños a la propiedad pública y conspiración de pandilla. Más tarde, el juez evaluó que había elementos que caracterizaban la conspiración y formación de pandilla, después de haber sido rechazados provisionalmente esta acusación, sin embargo Pedro siguió respondiendo a la investigación por el delito de daños a la propiedad pública.

La jefa de Nogueira y editorial del Portal Aprendiz confirmó en un testimonio al comisario responsable que él estaba en el lugar para trabajar, solicitó que el funcionario recibiera el testimonio de testigos que vieron al periodista de ser golpeado, pero el comisario responsable se negó. Nogueira fue encarcelado por tres (3) días y fue trasladado de la 78^a comisaría de policía a la 2^a DP, sin que fuera sometido a un examen forense en el momento de la detención. El periodista continúa respondiendo al proceso de conspiración y formación de pandilla.

b) Herramientas para la prevención y protección

Durante el debate, Bruno Monteiro aclaró que hay en la SDH/PR tres programas de protección, siendo dos de estos para adultos: el PROVITA – en el que la persona sale de su vivienda, tiene su identidad preservada para garantizar su seguridad y permanece

bajo protección mientras existe la persistencia de amenaza; y el Programa de Defensores de Derechos Humanos – que da condiciones para que la persona permanezca en su lugar de actuación laboral, con amplia seguridad garantizada para continuar con su trabajo. Informó que no hay un programa específico para comunicadores, y que cada caso es evaluado de acuerdo con el grado de amenaza sufrido.

Marina Iemini Atoji, representante de ABRAJI, informó acerca de la formación que la organización ofreció algunas veces a los periodistas para actuar en situaciones de riesgo y destacó la importancia de convencer a las empresas de medios de comunicación acerca de la importancia de la difusión de esta formación. Sugirió que este tema se tratara con más detalle por el GT.

José Augusto, presidente del Sindicato de los Periodistas Profesionales de São Paulo, aclaró que este sindicato no entiende el periodismo como una profesión de riesgo, aunque reconoce que hay situaciones que colocan al profesional en riesgo. Afirmó que de todos modos que cuando haya la agresión a periodistas la empresa de comunicación tiene que informar por medio de un CAT (Comunicación de Accidente de Trabajo) lo que ha ocurrido.

c) Saldo de la audiencia pública

De acuerdo con el presidente del GT, Tarciso Dal Maso, dos sectores de profesionales de la comunicación, se presentaron como los más vulnerables durante la audiencia: camarógrafos y reporteros, ya que son fácilmente identificables, y los periodistas de investigación. También señaló que el testimonio de Lumi Zunica demuestra la dificultad de proteger a los periodistas que tienen la intención de seguir la profesión, como es su caso, siendo importante identificar y pensar en soluciones a este patrón de comportamiento.

En resumen, los testimonios prestados al GT relatan que la violencia policial en las manifestaciones de junio fue generalizada y no sólo dirigida a la prensa, a pesar de esta haber sufrido con los ataques, incluso después de haberse identificado a los policías.

Reunión Ordinaria del GT, Agosto de 2013

En esta reunión, el GT contó con la presencia Adauto Soares y Fabio Eon UNESCO; director del Centro de Información de las Naciones Unidas en Brasil (UNIC-Rio), Giancarlo Summa; Ricardo González, del Artículo 19 - México; y Luis Alfonso Novoa, de Colombia.

a) Plan de Acción de la ONU

La presencia de representantes de agencias de la ONU en esta reunión permitió que el GT profundizara su comprensión del "Plan de Acción de la seguridad de los periodistas de la ONU y la cuestión de la impunidad" y discutiera las adaptaciones a la realidad brasileña.

Giancarlo Summa informó de que, en julio de 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró por primera vez una sesión dedicada a la protección de los periodistas, poniendo el tema como una prioridad asumida por la diplomacia mundial.

Sobre el Plan, declaró que este fue adoptado internacionalmente en 2012, y está coordinado por la UNESCO en colaboración con el Centro de Información de las Naciones Unidas en Brasil (UNIC-Rio), y es un documento de carácter general y global que tiene por objetivo, de acuerdo con la ONU, adaptarse a las realidades locales. Informó que Sudán fue el primer país donde se puso en práctica el Plan y hay una discusión sobre la adopción de planes nacionales en América Latina - en países como Brasil, Colombia, Honduras y México, cuyos índices de violencia contra los profesionales de los medios de comunicación son expresivos.

b) Propuesta: Crieación de Observatorio

Como parte de la realización del trabajo hecho por el GT, se propuso establecer un mecanismo permanente (Observatorio) para recopilar información y quejas y reenvío acciones de protección a los comunicadores y a la búsqueda de responsabilizar a los infractores. Este mecanismo permitiría prevenir y minimizar las situaciones de riesgo con acciones concretas y ágiles.

Laura Tresca, representante del Artículo 19 Brasil, hizo hincapié sobre la creación de un observatorio pensando que este debería estar penetrado de un debate sobre las medidas de protección que deben ser propuestas, la definición de la matriz de evaluación de los casos, la gobernanza y la participación de la sociedad civil.

Summa también subrayó la importancia de la institucionalización de los resultados, con la creación de una estructura física con una coordinación, y ofreció la sede de UNIC-Rio para ser utilizada como lugar para el observatorio.

c) Estudio de experiencias internacionales: México

Ricardo Gonzáles, de la ONG Artículo 19 mexicana, relató que en su país el **Mecanismo de Protección de los Derechos Humanos de los Periodistas** proviene de un trabajo establecido entre la sociedad civil y el gobierno, después de haber sido convertido en ley. El mecanismo está dividido en tres partes: la unidad de recepción de casos y respuestas rápidas, la unidad de evaluación de riesgos y la unidad de tratamiento de casos. La coordinación ejecutiva del Mecanismo es ejercida por el Ministerio del Interior y es sometido a un Consejo de Gobernadores, que cuenta con cuatro representantes de la sociedad civil con derecho a voto. La Junta es responsable de evaluar todos los procedimientos del Mecanismo y hacer el ajuste cuando sea necesario.

La legislación tiene como objetivo proteger a los defensores de los derechos humanos y derechos de los periodistas. La definición de estos dos temas considera las especificidades de cada uno. Hay también la previsión de la protección de los periodistas, que actúan como comunicadores en algún momento, no profesional, pero cumplen su función social. El Mecanismo tiene su propio presupuesto, asegurando la autonomía para su funcionamiento. Gonzales advirtió en el momento en que los fondos provienen de los ministerios que componen el Mecanismo, y que en el entonces sólo hay dos personas profesionalizadas, lo que ha comprometido la eficacia del programa.

Para Gonzales, otro problema del programa es la falta de previsión de formas por los beneficiarios, lo que conduce al proceso de legalización. Según él, otra crítica se refiere a la evaluación de riesgos, que se centra estrictamente en la amenaza de muerte limita el alcance del mecanismo. Asimismo, ha recordado la necesidad de que el mecanismo tiene manuales y protocolos claros.

d) Estudio de experiencias internacionales: Colombia

Luis Alfonso Novoa narró la historia de la creación del **Comité de Protección a Poblaciones Vulnerables de Colombia**, que se refiere al final de la década de 1990, cuando ocurrió el asesinato de un dirigente sindical por un agente del Estado. En ese momento, se abrió el debate sobre la necesidad de crearse un mecanismo de protección separado del Estado, ya que éste era el principal violador. El Comité fue establecido por un decreto, y hace dos años se sometió a una reforma que estableció una unidad especial de protección a nivel nacional con la estructura de carácter operativo. Dentro de esta unidad fueron entrenados para realizar tareas civiles y llevar a cabo los estudios de riesgo, así como la protección a rutas críticas a través de los mapas de riesgo, con sistemas de alerta contruidos con la información obtenida a través de los propios defensores de los derechos humanos.

Reunión Ordinaria del GT, Octubre de 2013

a) Reunión con Frank La Rue, relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU

El GT recibió la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, que mostró las medidas de protección, legales y políticas. Inicialmente, defendió la necesidad de democratización de los medios de comunicación, y la regulación de los contenidos ofrecidos. Para él, los medios de comunicación no sólo deben centrarse en la iniciativa privada; es necesario para equilibrar la báscula, ya que la concentración de los medios de comunicación conduce a la concentración de política. En consecuencia, se propone que los medios de comunicación tengan una plena identificación de los propietarios y accionistas mayoritarios, y que al menos el 51% de las acciones y el 50% del contenido sean nacionales para que la identidad de los pueblos esté protegida.

La Rue también afirmó que la violencia contra los periodistas es un tipo de violencia contra la sociedad en su conjunto, ya que es un ataque contra el derecho a la información. Por último, reforzó la necesidad de la despenalización de los delitos contra el honor y el desprecio con el fin de garantizar la libertad de expresión en su plenitud.

También en esta reunión se discutieron las recomendaciones propuestas al GT presentados por el Artículo 19 con vistas a la construcción de las recomendaciones para el informe final del Grupo de Trabajo. Las propuestas se dividen en tres áreas: la Prevención, la Protección y la Impunidad.

Coloquio sobre Medidas Nacionales e Internacionales para la Protección de los profesionales de la Comunicación, Octubre de 2013

El Coloquio sobre las medidas nacionales e internacionales para la protección de los profesionales de la comunicación, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Presidencia, la UNESCO y el Centro de la Información de la de las Naciones Unidas para Brasil (CINU-Rio), con el apoyo de la Asociación Brasileña Periodismo Investigativo (ABRAJI) y la PUC-Río, tuvo como objetivo discutir la seguridad de los profesionales de los medios y la lucha contra la impunidad. El evento contó con la presencia de la Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Maria do Rosário, el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y el Asesor Regional de Comunicación e Información de la UNESCO para el Mercosur y Chile, Guilherme Canela.

En la ocasión, la ministra propuso una mayor coordinación entre los comunicadores y defensores de derechos humanos, entre ellas en la discusión de medidas legislativas destinadas a luchar contra la impunidad de crímenes contra periodistas. Relacionó los asesinatos de periodistas con la formación de escuadrones de la muerte, que victimizan a los periodistas, los defensores de los derechos humanos y muchos otros grupos.

O relator especial das Nações Unidas sobre libertad de expresión señaló el aumento del crimen organizado en América Latina como la principal razón para el aumento de los casos de violencia contra periodistas. Señaló como propuesta que se creara estructuras tripartitas nacionales para la protección de los periodistas, que tengan la participación de organismos de los Estados, de representantes de la prensa y de la sociedad. También, en la ocasión, el Presidente del GT, Tarciso Dal Maso, presentó informe parcial del Grupo.

Audiencia Pública en Campo Grande, Noviembre de 2013

En la audiencia pública celebrada en Mato Grosso do Sul, fue denunciado el vínculo entre el tráfico y el poder público, especialmente las vinculadas con el contrabando de cigarrillos y drogas ilícitas en general, que, muchas veces, financia campañas electorales. En este entonces, estuvo evidente la intolerancia de la gente de vida pública, especialmente políticos locales, a las críticas y los informes hechos por los profesionales en sus medios de comunicación. Se citaron por las víctimas ejemplos de presiones e intimidaciones, como procesos judiciales, concesión de dominio excesivo de radio y canales de comunicación, los despidos injustificados e incluso los casos más graves, como el intento de asesinato, amenazas de muerte y asesinatos. Todo ello en un intento de silenciar a estos comunicadores y debilitar el debate público sobre cuestiones de política y los intereses de todos. Destacó además que el GT y las organizaciones interesadas en el tema deben ajustarse aún más a estas alturas de 2014, ya que es un año electoral y las violaciones tienden a aumentar.

a) Escucha de profesionales en situación de riesgo

O profesional de radiodifusión César Moura, que informó haber sido amenazado en la semana anterior, detalló la especificidad de Mato Grosso do Sul, en el caso de un estado que tiene fronteras con Bolivia y Paraguay. Según Moura, no son sólo los traficantes atacan a los periodistas. Señaló la existencia de un vínculo entre el tráfico y el poder público, especialmente las vinculadas con el contrabando de cigarrillos, que a menudo financian campañas electorales. Moura dice que las amenazas deben sufrir ellos mismos a sus preguntas sobre cuestiones de política pública.

El comunicador rechazó la impunidad frente a tantas muertes (citado el caso "Escaramuza", que está pendiente de una solución hace 15 años), y reforzó la necesidad de una acción más efectiva del gobierno en defensa de los organismos de los trabajadores de radiodifusión. Por último, defendió la federalización de los crímenes contra periodistas, debido a la falta de autonomía de la policía local para un cuadro tan complejo.

Lile Corrêa, periodista y profesional de radiodifusión desde hace dieciocho años, dijo que había perdido la cuenta de cuántas veces fue amenazado de muerte y que, debido a estas amenazas ha cambiado su rutina y cambiar la ciudad cada año. Hizo

hincapié en la necesidad de que el Estado presentara una política de apoyo a las familias de los periodistas asesinados. En el informe, explicaron varias veces que en Mato Grosso do Sul los propios comunicadores quienes trataban de protegerse unos a otros, ya que el Estado está ausente. "Estamos abandonados en la frontera de Brasil y Paraguay. ¿Son setecientos cincuenta kilómetros, ni la Policía Federal puede protegernos ", dijo.

El profesional de radiodifusión Hildebrando Procópio informó que en Porto Murtinho, a quinientos kilómetros de la capital, en la frontera con Paraguay, donde vive, ayudó a crear una forma de comunicación y protección entre los profesionales de los medios de comunicación de la región. Procopio dijo que la dificultad de la supervivencia de las pequeñas estaciones de radio que tienen condiciones para ofrecer protección a sus equipos, haciendo con que las medidas de protección adoptadas sean individuales.

Procópio destacó que hay una mayor posibilidad de evasión del delincuente cuando se comete en la región fronteriza: "Matar es ahora tan simple, está tan sencillo sacarle la vida a alguien, que no hay, como han mencionado aquí nuestros amigos, no hay castigo (. ..) yo diría que la mayor protección, sería un castigo ".

El profesional de radiodifusión, el locutor Gustavo Santos ha planteado la cuestión de la criminalización de los comunicadores e hizo un informe de su caso, en el que afirmó que había sido acusado injustamente de extorsión. Entonces el fotógrafo centró su discurso en la necesidad de apoyo estatal a las familias de las víctimas de la violencia.

José Antônio, representante de la FITERT em el GT, señaló la dificultad de discutir el tema de la seguridad con las empresas de comunicación, porque las pocas empresas que tienen algún tipo de aparato de este tipo, se limitan a proteger su patrimonio. El Presidente del GT, Tarciso Dal Maso, ratificó la extrema importancia de la responsabilidad corporativa de las empresas de comunicación. El representante de la ABERT, Rosario Congrio Neto, se comprometió a llevar al presidente la sugerencia de que se establezcan medidas de seguridad en el lugar de trabajo.

Actividad autogestionada en el Foro Mundial de Derechos Humanos: Internet y el derecho a la privacidad y libertad de expresión

El GT participó en el Foro Mundial de Derechos Humanos en el debate acerca del derecho a la privacidad y a la libertad de expresión en el contexto de Internet y los nuevos medios. La actividad contó con presentaciones por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank la Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, Catalina Botero, y del Asesor Regional de Comunicación e Información de la UNESCO para el Mercosur y Chile, Guilherme Canela.

Reunión Ordinaria del GT, Enero de 2014

En esta reunión se discutió el informe parcial del Grupo de Trabajo y los puntos sobresalientes del debate y las observaciones del GT entre las cuales se destacan las propuestas legislativas y los programas de protección, y la violencia contra los comunicadores populares.

a) Violencia Contra los Comunicadores Populares

Siguiendo las indicaciones en la audiencia pública de Mato Grosso do Sul, fue colocado en la agenda el tema de la violencia contra los comunicadores populares, sobre todo en contra los comunicadores de radiodifusión. La ley N ° 9.612 de 1998, que creó el Servicio de Radiodifusión Comunitaria fue cuestionada por la mayoría de los miembros del GT. Entre los temas tratados está el límite máximo de ERP 25 watts de potencia; y el hecho de restringir el patrocinio a los establecimientos ubicados en la zona de la comunidad atendida; y a la limitación de un área del canal.

A lo largo de la discusión de esta reunión, se identificaron los crímenes cometidos contra los comunicadores populares y los profesionales de radiodifusión, especialmente en los pueblos pequeños, son la naturaleza diferenciada de los demás. No es raro que el comunicador sufra las consecuencias de un ataque contra el vehículo de la comunicación en sí misma, ya que estos mecanismos de seguridad patrimonial son muy limitados en comparación a las grandes empresas, y que durante el proceso de fiscalización del funcionamiento de las actividades de radiodifusión sean cometidos

excesos que puedan generar también a violaciones de derechos para los profesionales de comunicación que trabajen con radiodifusión.

En este sentido, el Observatorio de la Violencia contra los Comunicadores, tiene que atender a estos detalles, incluyendo el establecimiento de una ruta orientada de flujo, tratamiento y seguimiento de las denuncias que puedan incurrir en los procesos administrativos dentro de los organismos que pudan cometer algún tipo de exceso, y el establecimiento de medidas de protección con vistas a promover la seguridad del lugar de trabajo.

b) Propuestas Legislativas

Tras el debate ha sido considerado que la Policía Federal ya tiene la prerrogativa de actuar en casos de graves violaciones de los derechos humanos, el GT se posicionó en el establecimiento de criterios claros para definir las situaciones en las que las investigaciones deben ser federalizadas. De acuerdo con el Proyecto de Ley n°. 1078/2011 fue evaluado como un paso positivo, sin embargo, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que era necesario regular mediante indicadores claros los términos de *omisión o ineficacia* de las esferas pertinentes para que pudiera ser aprobado por unanimidad.

De acuerdo con la exposición del Relator de la ONU para la Libertad de Expresión en los delitos de difamación y desacato, fue dado seguimiento a la posición a favor de la despenalización y no sólo despenalizar estos crímenes. Como propuesta alternativa a las sanciones penales se destacó el derecho de réplica y las sanciones en materia civil.

c) Sistema Nacional de Protección

El Coordinador-General del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), Igo Martini, hizo una exposición acerca del programa, así como sobre el proceso de construcción del Sistema Nacional de Protección que abarcará los tres programas de protección existentes en el sistema actual de la SDH.

En cuanto a la PPDDH, citó que uno de los mecanismos del programa es dar visibilidad a la cuestión del liderazgo, ya que el objetivo es mantener la defensa en el lugar de su acción, lo que es coherente con las inquietudes planteadas en el testimonio

de los comunicadores que temen verse obligados a alejarse de su profesión en el caso de que necesiten pasar a integrar un programa de protección. Informó que el programa ha reducido la adopción de 24 horas de escoltas, y sustituyéndolo por medidas de desplazamiento seguro, patrullas, entre otras medidas para evitar esta alternativa que es considerada extrema.

Después de la exposición, el GT propuso la ampliación y adaptación del programa actual en relación con el ejercicio de los profesionales de la comunicación, ya que no todo comunicador es reconocido como un defensor de los derechos humanos.

Martini reforzó la importancia de que los comunicadores y defensores de los derechos humanos puedan trabajar en colaboración, citando casos en los que las radios comunitarias ayudaron a combatir los prejuicios contra los líderes de las comunidades tradicionales permitiendo su acceso a la programación con el objetivo de educar a la población local sobre su lucha. A la luz de dicha experiencia, fue propuesta la realización de campañas en las radios comunitarias para difundir esta buena práctica y promover esta integración.

V. Contexto de la violencia contra comunicadores en Brasil

Después de un año de estudios y trabajos acerca del contexto de violencia contra periodistas en Brasil, fue posible hacer un diagnóstico. En esta sección se reflexiona sobre las principales formas de violaciones analizadas, sus características específicas y comunes.

La **participación de las autoridades locales y de la policía local** en la violencia contra los periodistas es una de las pruebas más importantes encontradas en los testimonios presentados al GT. Esta implicación y su principal consecuencia, es la dificultad de responsabilidad de los culpables, pueden ser fácilmente obtenidas a través de los testimonios de los periodistas amenazados de muerte Mauri König, André Caramante, Lumi Zunica, Lucía Rodríguez y del caso Rodrigo Neto y Walgney Asís, el fotógrafo asesinado en la región del Valle del Acero, en Minas Gerais.

En la audiencia pública realizada en Mato Grosso do Sul, se informó en el vínculo entre el tráfico y el gobierno. Allí, se evidenció la intolerancia de personas públicas, especialmente personalidades políticas locales, a las críticas y las quejas hechas por los profesionales de los medios de comunicación. Se citaron ejemplos de las víctimas de presión e intimidación, como procesos judiciales, concesión de dominio

excesivo de radio y canales de comunicación, los despidos injustificados y encima, los casos más graves, como el intento de asesinato, amenazas de muerte y homicidios. Todo ello, con vistas a intentar silenciar a estos comunicadores y debilitar el debate público sobre cuestiones de política y de intereses comunes.

Konig está de vuelta a Brasil, pero dijo que tiene la intención de seguir fuera de la cobertura periodística de casos relacionados a la policía por un período indefinido; Caramante fue de primero, alejado de la cobertura de la policía y más tarde despedido; Lucia Rodrigues también afirma haber sido despedida injustificadamente después de sufrir amenazas; Lumi Zunica reportó haber sido amenazado, junto con un colega que decidió trasladarse a otro estado. Estos casos apuntan a la dificultad de encontrar las medidas de protección que pueden mitigar los riesgos a la integridad física del comunicador sin impedirle a dar **continuación a sus actividades profesionales**.

Aún acerca de la audiencia de Campo Grande, la cuestión de la **impunidad** como factor determinante para las nuevas amenazas se hizo evidente en el discurso de todos los entrevistados, que recordaron los casos que se producen desde hace años y hasta ahora no han sido resueltos. Todos los entrevistados cuestionaron la falta de operación del gobierno, de manera general, en la atención dada a las muertes de periodistas ocurridas en los últimos años y, en casos recientes. También comentaron sobre la importancia de que la federalización de las investigaciones sobre los crímenes contra los periodistas tuviera en la región, que se enfrenta a una grave corrupción y la ineficiencia por parte de los organismos de seguridad pública locales.

El discurso también destacó los riesgos de la situación laboral para ejercer su labor periodística y de investigación en las **regiones fronterizas**, a causa de los peligros del tráfico y de la dificultad de investigación por el tránsito entre los territorios de los países. Algunas declaraciones mostraron que los ataques sufridos por algunos comunicadores ni siquiera avanzaron en las investigaciones iniciales ya que los que ejecutan superaron la frontera con Brasil y por lo tanto no pudieron ser perseguidos por las autoridades brasileñas.

La audiencia pública realizada en junio de 2013, en São Paulo, mostró que la **cobertura de protestas** llegó a ser especialmente peligrosa para los periodistas en Brasil. Muchos profesionales reportaron haber sido víctimas de represión y de la acción violenta de la policía. La audiencia pública, sin embargo, mostró que la población en general está expuesta a la violencia en las manifestaciones públicas, en las que la acción de la policía se ha mostrado desproporcionada. También se observa que la identificación

como periodista no es suficiente para prevenir o detener la agresión por la policía, y que a menudo el profesional de comunicación se convierte en la meta en razón de la cobertura de posibles arbitrariedades. En este caso, los informes indican que los fotógrafos y camarógrafos están más expuestos a la violencia institucional.

La encuesta de datos acerca de violaciones contra los periodistas en el contexto de las manifestaciones realizadas por ABRAJI, FENAJ y el Artículo 19 indica que los profesionales de la comunicación también han sido el blanco de los manifestantes y que hubo, como se ha indicado anteriormente en la acción de la policía, dos patrones de violaciones.

Una parte fue golpeada por manifestantes que actúan con violencia en las protestas y que asumen el riesgo de herir a cualquier persona que esté en el evento en su entorno. El caso más trágico de esta situación específica es el que llevó a la muerte del camarógrafo Santiago Andrade, el 10 de febrero de 2014, cuatro días después de haber sido golpeado por un artefacto lanzado por manifestantes, cerca al lugar donde se encontraba, en el momento exacto de la filmación de una manifestación en Río de Janeiro.

Hay también la agresión dirigida a los comunicadores, que por representar más concretamente en el momento de la manifestación los medios de comunicación para los cuales trabajan, se convierten en el objetivo de los manifestantes que no distinguen la empresa de comunicación de su profesional. El GT Comunicadores defiende la libertad de expresión, en particular contra las compañías de medios de comunicación. Sin embargo, repudia la acción de los que impiden que los trabajadores cumplan con su deber profesional y que sean estos acosados y les ataquen y por esto. En este caso, la identificación de los profesionales con el emblema de sus empresas, en lugar de brindarles con protección, les hace objetivos de las agresiones.

El caso de Santiago mencionado anteriormente, también nos lleva a la responsabilidad de los medios en la prestación de las **condiciones de seguridad** a sus equipos. El camarógrafo de la empresa Band se encontraba sin ningún tipo de equipo de seguridad y estaba cubriendo la protesta solo. Hace dos años, otro reportero de cine, Gelson Domingos da Silva, también fue fatalmente golpeado mientras cubría una acción policial en la comunidad de Río. Él tampoco tenía el aparato de seguridad necesario para minimizar los riesgos para su integridad física.

El Brasil no es y no debe ser caracterizado como una zona de conflicto armado en el sentido estricto, en cualquier caso, de los casos anteriores demuestran que es necesario comprender algunas peculiaridades de los riesgos que implican en la cobertura de los medios de comunicación en las zonas donde hay influencia de crimen o situaciones de tensiones y disturbios internos. Situaciones como las que se encuentran en algunos barrios marginales, en zonas de frontera seca, en manifestaciones o reintegraciones de pose relación a las comunidades, deben ser analizados desde una perspectiva particular, en que la práctica profesional de la comunicación requiere de una mayor atención y mecanismos de protección.

Influenciado por el trabajo y el análisis del GT, se incluyeron en la Resolución n° 06, de 18 de junio de 2013, el Consejo para la Defensa de la Persona Humana, la recomendación sobre la aplicación del principio de la no violencia en el contexto de manifestaciones y actos públicos de la siguiente manera:

“Art. 5° Las actividades llevadas a cabo por los reporteros, fotógrafos y otros profesionales de la comunicación son esenciales para el respeto efectivo del derecho humano a la libertad de expresión, en el contexto de manifestaciones y actos públicos, así como la cobertura de la ejecución de las determinaciones judiciales y el mantenimiento y la reintegración y pose.

Paágrafo único. Los reporteros, fotógrafos y otros profesionales de los medios de comunicación deben gozar de una protección especial en el ejercicio de su profesión, de ser ningún obstáculo para su desempeño, en particular, a través del uso de la fuerza ”.

La violencia contra los periodistas también se manifiesta en el campo simbólico y, a menudo se muestra a través de demandas judiciales. En una reunión del GT en octubre de 2013, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, identificó la necesidad de la **despenalización de los delitos contra el honor**. Los tipos penales son repetidamente evocados como una forma de amenaza a los comunicadores por los contenidos difundidos por estos. La sanción penal es restricción desproporcionada del derecho humano a la libertad de expresión. Existen disposiciones legales y mecanismos de sanciones civiles por castigo ilegal relacionado al honor. Para el derecho de réplica, el Senado aprobó en noviembre de 2013, un proyecto de ley que regula la práctica. La propuesta está a espera aprobación en la Plenaria de la Cámara de los Diputados (Proyecto de Ley N° 6446/2013).

Por último, la reunión del GT de enero de 2014 puso en voga los problemas que enfrentan las radios comunitarias. Las disposiciones de la Ley N ° 9.612/98 tienen restricciones a las nuevas licencias para las radios comunitarias. Un ejemplo es la predicción de un único canal disponible para dicho servicio por municipio, lo que implica en la necesidad de respetar una distancia mínima entre las estaciones de radio para reducir las interferencias. Esta restricción y exigencias burocráticas legales para colaborar que no asisten a la elección de todas las asociaciones interesadas en conceder. Por otra parte, es necesario que todos los agentes de fiscalización adopten mecanismos de control que respeten los derechos fundamentales.

VI. Datos del GT Comunicadores

Como se mencionó anteriormente, es difícil de medir con precisión la violencia contra los periodistas, debido a la profusión de números basado en metodologías, fuentes y definiciones muy diversas naturalezas. Agregando a que uno de los propósitos del GT - la proposición de acciones que ayudaran en el establecimiento de un sistema de seguimiento de las denuncias y de las medidas que visaran mejorar las políticas públicas, se hizo necesario llevar a cabo un estudio de referencia inicial que permitiera presentar una tabla consolidada de la violencia contra los periodistas en Brasil.

Para conseguir este objetivo, fue creada una línea telefónica específica en la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos que realizó el estudio de denuncias de violaciones relacionadas con la práctica profesional de los comunicadores.

El GT se propuso, además, a hacer um estudo del número de víctimas em los últimos cinco años (de 2009 a febrero de 2014), de modo que fuera posible dar el primeiro paso dirección al establecimiento de un sistema de indicadores nacionales dirigidos al mapeo de esta forma de violencia.

A partir de una definición del objeto de análisis que permitiera establecer con claridad qué casos cabrían en la recopilación de datos.

Los debates a lo largo del año han reforzado el sentido, ya presente durante el proceso de la creación del GT, que el objetivo de este trabajo no se limitaría a los periodistas. El representante de FITERT presentó en varias ocasiones las características y los riesgos relacionados con las actividades de los organismos de radiodifusión y de los comunicadores populares, y desde el inicio ALTERCOM demostró que se

importaba con los bloggers y otros comunicadores que, sin estar bajo la égida de las empresas de comunicación se convierten en aún más vulnerables. Por lo tanto, fueron considerados como profesionales de la comunicación de los periodistas de los medios de comunicación en general, bloggers, locutores, fotógrafos, camarógrafos y comunicadores populares, y profesionales de medios midiáticos en general, y como las violaciones relacionadas con la práctica de la profesión sólo aquellos directamente relacionados con la práctica profesional del comunicador y a la búsqueda de la restricción a la libertad de expresión.

Para definir el concepto de violación de la libertad de expresión, se utilizó el concepto trabajado por el Artículo 19, en su informe anual de 2012. En este, la violación se caracteriza como cualquier acción u omisión por parte del Estado o actor no estatal interfiriera de manera directa o participación indirecta en el libre circulación de ideas, opiniones o informaciones.

Basado en el concepto de violación de la libertad de la expresión anterior, y la percepción amplia de que, además de los propios periodistas, todos los profesionales de la comunicación son también víctimas de atentados contra la restricción de este derecho, fueron contempladas las denuncias de: agresión; amenaza; amenaza de muerte; intento de asesinato; atacar el vehículo de la comunicación; intimidación; restricción a la actividad profesional; la detención arbitraria; homicidios; acoso; persecución; y el secuestro.

Los esfuerzos de la sociedad civil para recibir y recopilar las denuncias en los últimos años nos ha permitido establecer un diagnóstico de la situación de una manera amplia. Así, el GT llevó a cabo un estudio preliminar que reúne de manera inédita las quejas recibidas por el Defensor Nacional de los Derechos Humanos y CDDPH; casos de violaciones de los derechos de los comunicadores dentro de las manifestaciones enviados por ABRAJI, FENAJ y por el Artículo 19; denuncias recibidas por ABI y FITERT; informaciones presentes en el Informe Anual de 2012 de Artículo 19; y en los informes de 2009, 2010 y 2011 FENAJ; y en el informe de ABRAÇO.

En la reunión del GT se fijó la instalación de un Plan de Trabajo que establece que la sistematización de los casos de violaciones sufridas por comunicadores se trabajaría en el espacio de cinco años, por lo tanto los datos trabajados se refieren al período entre 2009 y febrero de 2014.

Con el objetivo de llevar a cabo la encuesta a la que se propuso que el GT, se inició el trabajo a partir de una definición de nuestro objeto de análisis que permitiera establecer con claridad qué casos se adaptarían al concepto establecido y se encajaría en la colección de datos.

Los debates a lo largo del año nos hicieron reforzar la percepción, ya presente durante el proceso de creación del GT, que el objetivo de este trabajo no se limitaría a los periodistas. El representante de FITERT presentó en varias ocasiones las características y los riesgos relacionados con las actividades de los organismos de radiodifusión y comunicadores populares, y desde el inicio ALTERCOM se importaba con los bloggers y otros comunicadores que, sin estar bajo la égida de la empresa de comunicación se convierten en aún más grande vulnerables. Por lo tanto, consideramos como comunicadores profesionales de los periodistas en general los medios de comunicación, bloggers, locutores, fotógrafos, camarógrafos y comunicadores populares, y cómo violaciones relacionadas con la profesión sólo los directamente relacionados con la práctica profesional del comunicador y la búsqueda de coartar la libertad de expresión .

Para definir el concepto de violación de la libertad de expresión, se utilizó el concepto trabajado por el Artículo 19, en su informe anual de 2012. En este, la violación se caracteriza como cualquier acción u omisión por parte del Estado o actor no estatal interfiriera de manera directa o participación indirecta en el libre circulación de ideas, opiniones o informaciones.

Basado en el concepto de violación de la libertad de la expresión anterior, y la percepción amplia de que, además de los propios periodistas, todos los profesionales de la comunicación son también víctimas de atentados contra la restricción de este derecho, fueron contempladas las denuncias de: agresión; amenaza; amenaza de muerte; intento de asesinato; atacar el vehículo de la comunicación; intimidación; restricción a la actividad profesional; la detención arbitraria; homicidios; acoso; persecución; y el secuestro. El total de comunicadores que han sido víctimas de estos crímenes es de 321.

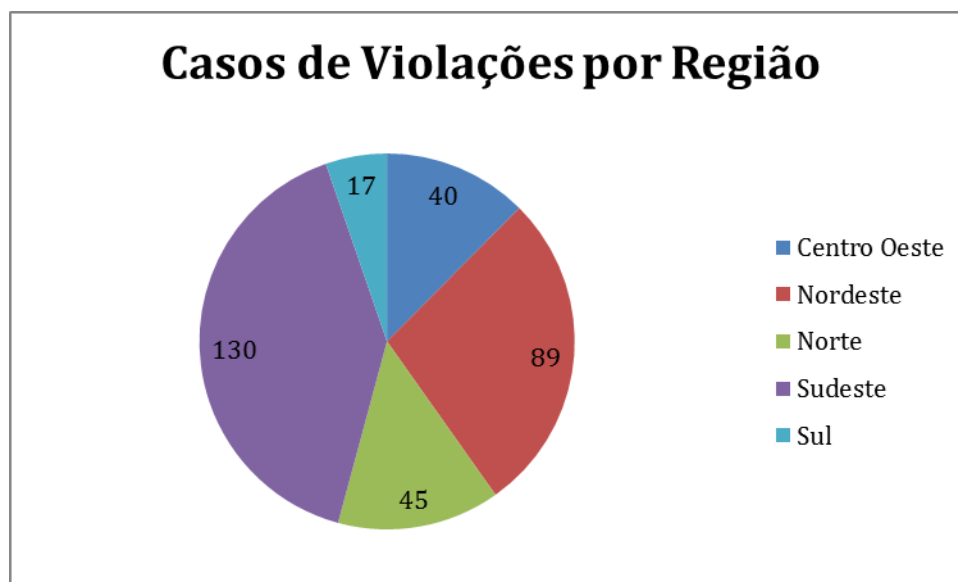
Los datos resultantes de esta encuesta indican una tendencia al aumento de la violencia contra los periodistas, como lo demuestran los datos de las organizaciones internacionales mencionadas anteriormente, sin embargo, hay que destacar que esta tabulación de los datos no permite esta declaración enfática a medida que trabajamos con un número limitado de históricos, y no tenemos informaciones suficientes para determinar si el aumento de las cifras de estas violaciones asociados con el creciente

número de denuncias; perfeccionamiento de los instrumentos de recolección de datos; o de hecho, con la expansión del fenómeno. De todos modos este es un estudio innovador que nos permite trabajar con las tendencias, y nos equipamos en la construcción de políticas públicas, como podrá verse a continuación.

En 2009 y 2010 se registraron, respectivamente, un homicidio, en los años 2012 y 2013 fueron seis y cinco homicidios en los que se pudo captar la relación de causalidad entre la actuación profesional y la motivación del crimen. También destacamos el regreso de una forma de restricción a la libertad de expresión que se ha incrementado de manera exponencial el número de violaciones: la violencia sistemática contra los periodistas en el ejercicio de sus actividades durante las manifestaciones públicas. Mientras que en los años anteriores, el número total de agresiones nunca ha superado el número de 25, en 2013 esta cifra aumentó a 97 en tan sólo dos meses de 2014 ya se han registrado ocho casos, como puede verse en la siguiente tabla.

Año	Agresión	Amenaza	Amenaza de Muerte	Intento de Asesinato	Perjuicio para los vehísulos comunicación	Acoso	Restricciones a la Actividad Profesional	Detención Arbitraria	Homicidios	Enemistarse	Persecución	Secuestros	Total
2009	23	6	1	1	0	0	5	3	1	0	0	0	40
2010	14	5	3	2	0	0	3	6	1	0	2	1	37
2011	24	5	2	3	2	1	7	3	3	0	0	2	52
2012	2	2	22	5	0	0	1	1	6	0	1	1	41
2013	97	9	1	2	4	0	3	7	5	5	3	0	136
2014	8	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	15
Total	168	28	29	13	6	1	19	24	18	5	6	4	321

Aunque en el año de 2013 haya una concentración de violaciones en el Sureste de Brasil, por el elevado número de ataques ocurridos en las manifestaciones en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, se trata de un fenómeno nacional.



A pesar de los esfuerzos, esta encuesta no es exhaustiva, y puede haber casos que no se encuentran o no se han comunicado al GT, pero aún puede servir como una base sólida para el establecimiento de un sistema de indicadores.

VII. Recomendaciones para Garantizar el Derecho Humano a la Libertad de Expresión

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de los Profesionales de Comunicación (GT) recomienda acciones para los comunicadores de seguridad eficaces en situaciones de riesgo que se derive del ejercicio de su actividad, de acuerdo con los objetivos establecidos en el momento de su creación. Las propuestas fueron formuladas a partir de los análisis de las denuncias relativas a la violencia contra los periodistas, audiencias públicas, revisión de documentos nacionales e internacionales y las experiencias de otros países latinoamericanos como se han informado en las secciones anteriores. Debido a la complejidad del fenómeno de la violencia contra los periodistas, el GT elaboró un conjunto de recomendaciones de naturaleza diversa para ofrecer respuestas diferentes y en distintos niveles de detalle para el problema.

Tras la presentación de las recomendaciones, presentaremos en detalle una de las propuestas emitidas desde antes de la creación del GT y construida a lo largo de los trabajos desarrollados en colaboración con las organizaciones internacionales.

7.1 Al Poder Ejecutivo Federal, dentro de sus atribuciones:

1º Recomendar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia a:

- a) Ampliar el **Sistema Nacional de Protección** con rutas para contemplar los comunicadores que sufren amenazas, teniendo en cuenta cualquier actividad específica de estos profesionales, y ofrezca, además de las medidas de protección a los comunicadores en sí, la adopción de medidas con vistas a la protección de los lugares de trabajo;
- b) Incluya las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y de los comunicadores sociales en la Coordinación Nacional del Programa de Protección que satisfaga las demandas específicas de los comunicadores;
- c) Realice campañas de divulgación del Programa de Protección a los comunicadores;
- d) Establecer una cooperación con el sistema de las Naciones Unidas (UNESCO, UNIC-Rio) y el Ministerio de Justicia para crear el **Observatorio sobre la Violencia contra los comunicadores**. Tal iniciativa debe registrar los eventos relacionados, pero también tener un sistema de seguimiento para la resolución de los casos en los que sea posible que el usuario conozca la condición formal del caso, así como las iniciativas institucionales y no gubernamentales ejecutadas, tal como se describe en la sección VIII de este informe;
- e) Integre el Observatorio sobre la Violencia contra los Comunicadores al flujo del el Sistema de Protección Nacional, lo que permita un rápido estudio de los casos en los que sea necesaria alguna una medida de protección;
- f) Asegurar que las organizaciones que defienden la libertad de expresión de los comunicadores tengan una participación efectiva en el Observatorio desde su concepción hasta su gestión;
- g) Cuando haya flagrante omisión o ineficiencia en resolver, o sospecha de participación de las autoridades locales a los delitos contra el derecho

humano a la libertad de expresión, que se utilice la Ley n ° 10.446, de 8 de mayo de 2002, para la federalización de la investigación de estos crímenes;

- h) Cuando haya flagrante omisión o ineficiencia en el procesamiento y juicio en el juzgado, o se sospeche de la participación de los miembros del poder judicial en la práctica de los delitos contra el derecho humano a la libertad de expresión, que se haga uso de los mecanismos del Consejo Nacional de Justicia, como el Programa de Justicia Plena.

2° Recomendar al Ministerio de la Justicia que:

- a) Elabore un estudio detallado de los equipos y de las condiciones de seguridad que tengan la capacidad para mitigar los riesgos para la integridad física de los profesionales de la comunicación, sobre todo en la cobertura de situaciones de conflicto;
- b) Desarrollar protocolo estandarizado para las acciones de las fuerzas de seguridad pública en el contexto de manifestaciones en base a los preceptos establecidos en la Resolución n° 06 de 18 de junio de 2013 del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos (anexo), sobre la aplicación del principio de la no violencia en el contexto de manifestaciones y actos públicos, así como en la ejecución de las órdenes judiciales de mantenimiento y recuperación de posesión;
- c) En colaboración con las compañías de medios de comunicación y con los profesionales independientes o que trabajen por cuenta propia, ofrezca capacitación en seguridad a los profesionales de comunicación, en situaciones cotidianas y en las coberturas de eventos específicos como los de protesta social;
- d) La Policía Federal, en el cumplimiento de su misión con respecto a la radiodifusión, adopte un procedimiento estándar en la supervisión de todos los servicios, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de supervisión
- e) Que se guíe a las fuerzas de seguridad pública no recojan los equipos de trabajo y las memorias de los comunicadores en el contexto de la cobertura de eventos por los medios de comunicación.

3° Recomendar a la Secretaría General que:

- a) Establezca una mesa de diálogo tripartito (organizaciones representativas de los trabajadores y de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y del gobierno), con el objetivo de discutir y proponer soluciones para mejorar la garantía colectiva del derecho a la seguridad de los comunicadores en su ejercicio profesional;

4° Recomendar a la ANATEL que:

- a) Que en el caso del no cumplimiento de su misión en relación con la radiodifusión, adopte un procedimiento estándar en la inspección de todos los servicios, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de la inspección.

7.2 Al Poder Legislativo, dentro de sus atribuciones:

1° Recomendar al Congreso Nacional que:

- a) Apruebe iniciativas legislativas con vistas a aprimorar el sistema de federalización de investigaciones de crímenes contra a libertad de expresión, en los casos de omisión, de ineficiencia, la falta de cumplimiento de plazos razonables o sospecha de la implicación de las autoridades locales, observando las disposiciones legales vigentes y aplicables, tales como la Ley n° 10.446, de 08 de mayo 2002;
- b) Mejore el Incidente de Desplazamiento de Atribuciones para los procedimientos judiciales relacionados con los delitos contra los derechos humanos (Enmienda Constitucional 45/2004);
- c) Se profundice el debate para lograr la construcción de un consenso que permita el avance legislativo sobre el derecho de réplica;
- d) A través de sus Comités de Derechos Humanos, que respeten y promuevan la aplicación de las recomendaciones de este informe de acuerdo a sus atribuciones;
- e) Realice seminario de debates sobre el impacto de los crímenes contra el honor y los delitos previstos en el art. 70 de la Ley No. 4177 de 1962, y en el

art. 183 de la Ley n° 9.472, de 1997, en relación a la violencia a los comunicadores; discutiendo la posibilidad de convertir ciertos ilícitos penales en ilícitos civiles.

7.3 A los Poderes Ejecutivos Estadales, dentro de sus atribuciones:

1° Recomendar a las Secretarías Estadales de Seguridad Pública que:

- a) Adopte protocolo estandarizado para las acciones de las fuerzas de seguridad pública en el contexto de manifestaciones sobre la base de los preceptos establecidos en la Resolución n° 06 de 18 de junio de 2013, del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos (anexo), en el principio de la no violencia en el contexto de manifestaciones y actos públicos, así como en la ejecución de las órdenes judiciales de mantenimiento y recuperación de pose;

7.4 Para los medios de comunicación, dentro de sus atribuciones:

1° Recomendar a los medios de comunicación que:

- a) Desarrollen y adopten mecanismos de protección destinados a sus equipos en su práctica profesional, así como responsabilizarse por el entrenamiento, a menudo, de sus equipos. Las empresas podrán buscar apoyo del Estado, a través de sus estructuras de seguridad pública y desarrollar estrategias propias para la mejor identificación y alejamiento del riesgo a la integridad física de sus profesionales;

7.5 Al Poder Judicial y a los organismos relacionados a las funciones esenciales de la Justicia, dentro de sus atribuciones:

1° Recomendar al Ministério Público del Trabajo que realice fiscalización constante con vistas a garantizar que las empresas darán a los comunicadores mecanismos de protección en su práctica profesional.

2° Recomendar al Consejo Nacional de Justicia (CNJ) firmar colaboración con el Observatorio de la Violencia contra Comunicadores con el fin de poner en funcionamiento mecanismos como el *justicia plena*, cuando haya flagrante omisión o ineficiencia en el procesamiento y juicio, o se sospecha de la participación de los miembros del poder judicial en el crimen contra el derecho humano a la libertad de expresión.

3° Recomendar a la Escuela Nacional de Fiscales Generales (CNPJ) que pongan atención a la aplicación por parte de las policías y fuerzas de seguridad de los mecanismos de protección para los comunicadores en el ejercicio de sus funciones;

4° Recomendar al Consejo Nacional del Ministério Público (CNMP) que observe la aplicación por los agentes públicos de los mecanismos de protección para comunicadores en el ejercicio de sus funciones.

7.6 Al Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), dentro de sus atribuciones:

1° Recomendar al Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana que:

- a) Establezca colaboración con la oficina de la UNESCO en Brasil para producir informe nacional de los “Indicadores de Seguridad de los Comunicadores”, con el objeto de que se desarrolle sistemáticamente estudios con vistas a identificar las causas y objetivos principales de la violencia contra comunicadores en Brasil;
- b) Realice seminario de debate acerca del Incidente de Desplazamiento de Competencia para los procesos judiciales relación a los crímenes contra los derechos humanos (Enmienda Constitucional 45/2004), y envíe sus conclusiones y recomendaciones al Congreso Nacional;
- c) Elabore, en colaboración con las organizaciones civiles que componen este GT, publicaciones de lenguaje asequible acerca de la seguridad de los profesionales de comunicación y el derecho humano a la libertad de

expresión, así como materiales sonoros que puedan ser compartidos en las radios;

- f) Cuando haya flagrante, omisión o ineficiencia en la resolución, o sospecha de la implicación de las autoridades locales en los crímenes contra el derecho humano a la libertad de expresión, se apliquen las disposiciones legales vigentes y aplicables de la Ley n° 10.446, de 08 de mayo 2002; para la federalización de las investigaciones de estos crímenes;
- d) En colaboración con representantes y organizaciones de la sociedad civil y representantes del gobierno involucrados, para continuar con las discusiones sobre la radiodifusión comunitaria y las violaciones de los derechos de que sufren los comunicadores que ejercen sus funciones en estos vehículos.

VIII. El Observatorio de la Violencia contra los Comunicadores

El GT Comunicadores propone que el Observatorio sea estructurado por un trípode que permita el manejo de violaciones contra periodistas en su ejercicio profesional de forma plural de acuerdo a su nivel de gravedad y necesidades específicas de tratamientos. La estructura antes mencionada se establecerá a través de:

- I. **Unidad de Recebimiento de Casos:** tendrá como atribución el recebimiento de la denuncia, derivación y seguimiento de la evolución;
- II. **Sistema de Indicadores:** una plataforma web que permita a cualquier ciudadano tener acceso a un panorama en constante actualización de la violencia contra los periodistas en el país;
- III. **Mecanismos de Protección a los Comunicadores:** una línea de actuación del Sistema Nacional de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia que actúe en materia de protección, teniendo en cuenta los aspectos específicos de la práctica de los profesionales de la comunicación.

Se propone que el Observatorio sea coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (SDH / PR), en colaboración con el Sistema

de las Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de la Reforma del Judicial.

Su sede será en Río de Janeiro, en la oficina de la UNIC-Rio, y será administrada a través de un Comité Gestor tripartite, compuesto por organizaciones de la sociedad civil que actúen en el área de combate a la violencia contra los comunicadores, sectores del Estado considerados estratégicos para el tema, y el Sistema ONU.

8.1 Unidad de Recebimiento de Casos

Esta unidad deberá tener la capacidad de recibir denuncias, y buscar interrumpir la situación de violación de los derechos humanos y/o garantizar que esta sea debidamente investigada. Para esto, es necesario actuar en cuatro niveles:

- a) oír, orientar y registrar la denuncia;
- b) dar seguimiento a la denuncia para la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos, quien a través de la estructura que ya posee, estará en mejores condiciones para remitir la queja a la res de protección, y solicitar el establecimiento de procedimientos administrativos cuando sea apropiado;
- c) controlar las referencias hechas por el Defensor del Pueblo y sobre las medidas adoptadas por los organismos responsables, informando a la persona demandante de lo que pasó con su denuncia;
- d) supervisar las investigaciones y procesos judiciales de la Secretaría de la Reforma Judicial;
- e) En situaciones graves y de flagrante de las autoridades locales en el proceso de responsabilidad de los presuntos, registrar el caso para el seguimiento por el Programa de Justicia Plena del Consejo Nacional de Justicia;

De esta manera integraremos a la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la lucha contra las violaciones a la libertad de expresión y a la impunidad de los responsables.

8.2 El Sistema de Indicadores

Como Grupo de Trabajo cumplimos la tarea de estudiar el problema en sus diversas formas, realizar un amplio estudio de casos que sirven como base inicial para la creación de un sistema de indicadores, así como mostrar los problemas que encontramos y sugerencias para el funcionamiento de este sistema.

En este informe los datos encontrados a partir del concepto amplio de comunicador, como se definió previamente, convencidos de que el sistema de indicadores tendrá que tener una clara definición de su objeto, con el fin de ser capaz de seleccionar los casos relacionados a la actividad profesional de comunicador y otros causados por la violencia en general. Aquí vale reforzar la necesidad de romper con un concepto que excluye en el que sólo el periodista es considerado objetivo de la restricción de la libertad de expresión, siendo solamente registrados los casos de esta categoría profesional, lo que crea grave deficiencia.

Las **fuentes** deben ser la prioridad principal, y cuando secundarias, es necesario que estén debidamente registradas como las denunciantes a través de una metodología que permita una triangulación de los datos con vistas a permitir la identificación de los casos relacionados con la actividad del comunicador y con la libertad de expresión.

La frecuencia de la recolección de datos es también central. El sistema debe proveer para la averiguación de los hechos *in loco* cuando sea necesario, pero esta no debería ser la metodología de trabajo habitual. La recepción de denuncias y la búsqueda constante de informaciones mediante la creación de una red de organizaciones de la sociedad civil serán esenciales para alimentar y garantizar el funcionamiento del Observatorio. La recopilación de informaciones iniciales sobre cada evento también se puede producir a partir de materiales publicados por los medios de comunicación.

Las campañas de concienciación serán esenciales para la difusión del Observatorio, y especialmente útiles para superar el fenómeno de la falta de percepción del riesgo relación a los comunicadores. Estos a menudo se equivocan al hacer esta evaluación con el fin de naturalizar o subestimar las amenazas, y terminan por no hacer el registro.

Considerando que la identificación y el análisis detallado de un problema es el primer paso para enfrentar la cuestión, los datos generados por las denuncias serán utilizados para mapear las regiones críticas. Por el número de quejas recibidas, el Comité Directivo del Observatorio podrá detectar y actuar regionalmente en puntos específicos

de violencia contra los periodistas, así como en la búsqueda de soluciones para superar la restricción de la libertad de expresión en su forma más recurrente.

8.3 Mecanismos de Protección

El Mecanismo para la Protección de Comunicadores será una línea del Sistema de Protección Nacional que promoverá, cuando sea necesario, medidas de protección para los comunicadores a través de una evaluación de los casos y situaciones en parejas, conocedores de las características específicas que les afectan.

Como sugerencia, se recomienda la adopción de mecanismos de protección que garanticen la permanencia del comunicador en su lugar de trabajo, así como el ejercicio continuado de sus actividades profesionales.

El Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos de la Presidencia de la República

Considerando que el presente informe prevé la expansión del Sistema Nacional de Protección que se está discutiendo en el contexto de la SDH, centrándose en la experiencia del Programa Nacional de los Defensores Nacionales, abajo sigue un breve resumen de su actual modelo de funcionamiento.

El Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos de la Presidencia (PPDDH / SDH) representa el compromiso del gobierno de Brasil para proteger a aquellos y aquellas que luchan por la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Creado en 2004, a partir de una recomendación de CDDPH, tiene como objetivo la adopción y articulación conjunta de medidas que puedan garantizar la protección de las personas que están en riesgo o amenaza debido a su papel en la promoción o defensa de los derechos humanos.

Las acciones del Programa no están dirigidas sólo para la protección de la vida e integridad física de los defensores, sino también y sobre todo en la articulación de medidas y acciones que se centren en la superación de las causas que generan las amenazas y las situaciones de riesgo

El programa actualmente está presente en siete estados brasileños: Bahía, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul y Ceará. Los

estados que no cuentan con programas son atendidos por el Equipo Técnico Federal del Programa Federal coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia.

Para incluir el defensor de los derechos humanos en el Programa de la Protección s necesario que se cumplan los siguientes requisitos: solicitud de evaluación, la prueba de que la persona actúa en la defensa o promoción de los derechos humanos; identificación de la relación de causalidad entre la violación o amenaza y la actividad de defensor de los derechos humanos; consentimiento y la adhesión a sus normas.

Las medidas de protección del Programa para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos comprenden articulaciones con los organismos y entidades, públicas y privadas, destinadas a resolver los conflictos y la superación de las causas que generan las amenazas; con los órganos de la justicia y de los estados de la Unión para la defensa jurídica y asistencia en violaciones de supervisión del sistema; con los órganos de seguridad pública de los estados con el fin de garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos y la investigación de violaciones; de medidas psicosociales; de acciones que permitan el reconocimiento de las prestaciones de un defensor de los derechos humanos en la sociedad; y, excepcionalmente, la retirada temporal del defensor de su lugar de trabajo en casos de amenaza grave e inminente o peligro.

Son los muchos desafíos en la implementación de esta política. Entre estos desafíos está hacer frente a todas las formas de violencia y amenazas, la investigación y la rendición de cuentas materiales a los autores e intelectuales de estas violaciones, garantizando el acceso a la inclusión, a la asistencia social, a la educación y a los programas de salud.

El programa trata de centrarse en la superación de las causas que generan el riesgo y la amenaza. Y para tanto, su actuación comprende un conjunto de medidas y acciones con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y con la sociedad civil organizada.

La sociedad civil Organizada, las agencias del gobierno federal, el poder legislativo y el poder judicial federal participan en el programa a través de la "Coordinación Nacional" organismo deliberante del Programa que, entre otras funciones, decide sobre las solicitudes de inclusión y exclusión, sobre las medidas de protección a ser adoptadas, además de diversos temas relacionados con los defensores de derechos humanos.

Este enlace con los organismos gubernamentales y la sociedad civil es fundamental para seguir consolidando las bases de esta política de protección y contribuye a la implementación de acciones de investigación, la prevención y de la lucha contra violaciones para que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades en sus locales de actuación.

Destacamos una vez más que la expansión del Sistema de Protección Nacional deberá proporcionar una adaptación del PPDDH a este nuevo objeto, incluyendo a los comunicadores amenazados, independientemente de sus agendas.

Anexos

Nota sobre la violencia contra los periodistas en el Valle del Acero, 17 de abril 2013

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de Profesionales de la Comunicación en Brasil, órgano del Consejo para la Defensa de la Persona Humana (CDDPH) decide repudiar públicamente a la violencia contra los profesionales de los medios de comunicación en la región del Valle del Acero, en Minas Gerais.

Dada la información de que dos periodistas más fueron amenazados en la región, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República que evaluara los riesgos que enfrentan y, si es necesario, incluirles en el Programa Nacional para la Protección de Víctimas y Testigos (Provita).

Esta protección se hace aún más necesario tras el reciente asesinato del reportero fotográfico Wagne Assis Carvalho, el pasado domingo, en Coronel Fabriciano, que merece una investigación cuidadosa y responsable. Al igual que en el caso del asesinato del periodista Rodrigo Neto, el 8 de marzo, en Ipatinga, el Grupo de Trabajo solicitó informaciones a todas las autoridades competentes y supervisará los desarrollos de no permitir que haya impunidad.

Los delitos contra los profesionales de los medios de comunicación de todo el país, pero especialmente en el Valle del Acero, en este entonces, representan un ataque a la

libertad de expresión y a los Derechos Humanos. Brasil, declarado como un país democrático y poseedor de una prensa libre, no puede vivir con esta realidad.

Nota de Repudio a la violencia contra los profesionales de los medios de comunicación durante las manifestaciones en São Paulo, 14 de junio 2013

El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de los Profesionales de la Comunicación en Brasil, organismo del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), repudia la violencia contra profesionales de comunicación que participaron de la cobertura de manifestación realizada en la ciudad de São Paulo, en la noche de este último jueves (13).

En la evaluación de este Grupo de Trabajo, las agresiones sufridas por los manifestantes y los profesionales de los medios de comunicación, que estaban trabajando en ese momento, constituyen graves violaciones de los Derechos Humanos y afrentan a la democracia, ya que han ofendido violentamente la libertad de expresión y el libre ejercicio de la comunicación.

Estamos en contacto con los profesionales heridos, así como con las entidades representativas de la categoría en São Paulo, con el objetivo de expresar solidaridad y ganas de observar y seguir a esta situación, incluyendo la identificación y la responsabilidad de los autores de estos crímenes.

El próximo 25 de junio, a partir de las 14 horas, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de los Profesionales de la Comunicación en Brasil, celebrará su primera audiencia pública en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo. Ya anunciando que la violencia contra los profesionales de este episodio estará en la agenda de la reunión.

Nota sobre amenazas al dibujante Carlos Latuff, 04 de septiembre de 2013

El Grupo de Trabajo de Defensa de los Comunicadores del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) repudia públicamente las amenazas contra el caricaturista Carlos Latuff.

Latuff ha recibido en su página en una red social mensajes con amenazas de muerte durante el último mes.

Entendemos que las amenazas a los periodistas constituyen grave afrenta a la libertad de expresión, uno de los pilares esenciales de los derechos humanos y de la democracia.

Informamos que enviamos las amenazas a la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos, así como a otros organismos pertinentes, y que vamos a seguir el desarrollo de las investigaciones.

Nota sobre la muerte de Santiago Ilídio

El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de Profesionales de la Comunicación en Brasil, órgano del Consejo para la Defensa de la Persona Humana (CDDPH), expresa su dolor por la muerte del camarógrafo Ilídio Santiago Andrade, golpeado por un artefacto explosivo mientras trabajaba en la cobertura de una manifestación en Río de Janeiro la semana pasada. Este caso lamentablemente simboliza la violencia trágicamente sistemática contra los profesionales de la comunicación que actúan en la cobertura de las manifestaciones.

A lo largo de este primer año de trabajo, se han repetido formas de falta de respeto y la violencia contra los periodistas, fotógrafos, camarógrafos, locutores de radio en el cumplimiento de sus deberes profesionales. Es inaceptable que los trabajadores de la comunicación, que están ahí para registrar y reportar lo que ocurre en el contexto de estos actos estén expuestos a esta violencia sin sentido que aprovecha las manifestaciones públicas y democráticas para destruir el patrimonio público con vandalismo, daño a la gente y, como en este caso, para matar.

En este sentido, mientras lamentamos profundamente la muerte del camarógrafo y nos solidarizamos con su familia, reforzamos la necesidad de que las fuerzas de seguridad adopten protocolos claros y orientados para garantizar el respeto de los derechos humanos de los manifestantes y también de los profesionales de los medios de comunicación. Es importante, también, que los medios de comunicación ofrezcan los equipos de protección a los miembros de sus equipos .

Por último, este Grupo de Trabajo , comprometido con la democracia y los derechos humanos , repudia con toda vehemencia todo cualquier acto de violencia, en contra a cualquier persona, y cobra con urgencia la responsabilidad de los autores del delito. Aunque no haya sido un ataque intencional dirigido a la prensa profesional, los autores tomaron el riesgo de causarlo. No podemos dar espacio para que las manifestaciones democráticas se conviertan en territorios de guerra, siendo usurpadas por los que quieran propagar la violencia y la barbarie